

## Sobre las relaciones entre el Estado mexicano y el Grupo Monterrey

El viernes pasado un periódico de esta ciudad publicó el análisis que hizo John Goshko para el diario norteamericano *The Washington Post* sobre las relaciones entre los hombres de negocios de la ciudad de Monterrey y el gobierno mexicano. Me propongo hoy intervenir en el debate que abrió Goshko, porque, según mostraré al final de esta emisión radiofónica, el problema que permanece en el fondo de lo que se ha dicho es un problema esencial para la convivencia pacífica entre los mexicanos.

Presentaré primero la opinión de los que han intervenido en el debate. Enseguida resumiré los acuerdos y los desacuerdos entre ellos. Intentaré luego dilucidar la razón de ser de los desacuerdos, para mostrar al final el problema oculto a que me he referido.

Según John Goshko el Grupo Monterrey, cuyo poder económico compara al de la familia Krupp en Alemania, y que se expresa en la fabricación de vidrio, placas de estaño, manufacturas de papel e instituciones bancarias, de manera tal que "produce el 7 por ciento del Producto Nacional Bruto del país", y que "contribuye con el 24 por ciento de la producción industrial nacional", "tiene una importancia que trasciende su obvio impacto en la economía. Cuando quiere puede formar lo que en efecto es la única oposición importante en este país al gobierno". Nacido en 1890, cuando Isaac Garza y Francisco Sada fundaron la cervecería Cuauhtémoc, está actualmente integrado —añade Goshko— por "unos 200 hombres de negocios ricos y conservadores", cuya unidad hace que Monterrey sea "el centro nervioso, desde donde el grupo influye a las clases pudientes en todo México para oponerse o apoyar al gobierno". La animosidad del grupo contra el expresidente Echeverría se origina, "en gran parte", por el asesinato de que fue objeto su jefe Eugenio Garza Sada, en 1973, del cual culparon a la "retórica encendida contra los empresarios y a la debilidad hacia los grupos radicales" por parte del expresidente.

El segundo debatiente ha sido Robert Scott, politólogo norteamericano especialista en cuestiones mexicanas, autor, entre otros, de un conocido libro sobre el sistema político mexicano cuyo título es *Gobierno mexicano en transición*. Scott opina que la comunidad empresarial regiomontana, que representa los intereses de inversionistas y de compañías extranjeras, instauró una campaña de rumores, a lo largo de todo el sexenio anterior, contra el presidente, contra su política y contra su familia. Después de sugerir un paralelismo entre las personas y las obras de Luis Echeverría y Franklin D. Roosevelt, Scott afirmó que los problemas entre el presidente y Monterrey

*empezaron a producirse cuando el Presidente les cerró el acceso a los niveles de la decisión política en cuanto a economía. El Grupo no pudo penetrar al círculo presidencial encargado de las políticas económicas y, en consecuencia, no pudo lograr que sus intereses estuvieran representados tan fácilmente y tan pronto como había sido en gobiernos anteriores.*

Hasta aquí Scott.

Por su parte, Jorge Chapa, presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey, dijo que en lugar del "tal Grupo Monterrey, que no existe", lo que hay es "unidad empresarial, de industriales y de comerciantes y de esa región del país". Explicó también que Monterrey "ofrece un *modelo alternativo* de la forma en que México debería trabajar", porque, según la letra de sus declaraciones, "*tenemos éxito aquí*. La gente tiene los salarios más altos, los mejores beneficios y prestaciones sociales en todo México. *Y ello se ha logrado a través de la empresa privada* —sentenció Chapa—, no por medio del gobierno y su intromisión. *Nuestro éxito es un reproche a los burócratas de la capital, y es por eso que ellos piensan que nosotros somos una especie de oposición organizada.*" En otra declaración este mismo dirigente empresarial afirmó: "*Nosotros nos hemos dedicado siempre a trabajar. . . y otros. . . han reconocido nuestra participación social en avances sociales de todo tipo.*" Distinguió entre la franqueza y el respeto de sus coterráneos al señalar los errores del expresidente Echeverría —lo cual es la verdad— y la militancia opositora contra el gobierno o el patronato a la campaña de rumores que todo el país conoció —la veracidad de todo lo que negó Chapa.

Pedro Zorrilla Martínez —gobernador de Nuevo León—, cuyas tirantes relaciones con los empresarios regiomontanos todo el país conoce, aseguró que "el Grupo Monterrey despierta atención en el extranjero porque es el único en el país con características de cohesión, que le permiten erigirse como grupo identificado"; aseguró también que ese grupo, que es opositor a su gobierno, "suele ser tomado como catalizador de movimientos de grupos de presión (de la iniciativa privada) que operan en todo el país"; informó que su gobierno ha arrebatado a los empresarios algunas importantes posiciones; aceptó que muchos hombres de empresa neoloneses son "nacionalistas", aunque afirmó que, en México, "existe un natural antagonismo" entre el gobierno y la empresa privada, y calificó de "nefasto cualquier maridaje entre el poder económico y el poder político".

Ha habido otras dos opiniones que deseo mencionar.

El exdiputado panista y hoy dirigente del Movimiento Democrático Mexicano, Alejandro Cañedo Benítez, dijo que el grupo es socio-económico del gobierno, por lo cual las leyes se discuten en los organismos de la empresa privada antes que en la Cámara de Diputados.

El diario *Excelsior*, en un ambiguo editorial titulado "El Ejemplo de Monterrey", afirma que "lo que ha pasado en Monterrey desde los principios de su industrialización es aleccionador en multitud de sentidos. . . porque lo

hecho allí puede servir como punto de referencia y ejemplo para otras partes de México”.

Hasta aquí las intervenciones en el debate.

Procede ahora resumir y separar los acuerdos y los desacuerdos.

Cinco de los seis participantes en el debate están de acuerdo en que existe el Grupo de Monterrey. Uno de ellos —justamente el vocero de los empresarios regiomontanos— niega esa existencia. Pero, considerándolo con más atención, también este último acepta esa existencia. Porque si un grupo es “una pluralidad de seres o de cosas que forman un conjunto”, el señor Chapa, al dividir a la sociedad mexicana en “*nosotros*, ‘*ellos*’ y ‘*los otros*’,” está aceptando implícitamente, pese a la negativa explícita, la existencia grupal de sus representantes.

También hay acuerdo en cuanto al poder económico aproximado del grupo, cuya colocación entre los cinco grupos económicos del país nadie discute.

Parece que hay un tercer acuerdo: los ingresos y las prestaciones sociales de los obreros que trabajan en las empresas de los “200 ricos”, que menciona Scott, son superiores al promedio de los obreros del resto del país.

Los participantes en el debate aceptan unánimemente que la comunidad empresarial neolonesa se opuso públicamente a la política económica del expresidente Echeverría, aunque hay diferencias en cuanto a la explicación de esa oposición.

Entre los declarantes que he mencionado existen, no obstante, varias discrepancias y, en este caso como en muchísimos otros, las diferencias, más que las semejanzas, nos llevarán a la solución de un problema.

No hay acuerdo, en primer lugar, en cuanto al carácter extranjerizante del grupo. Robert Scott, que es norteamericano y vive en una de las ciudades más industrializadas de los Estados Unidos, asegura que el grupo es representante de intereses extranjeros. El gobernador de Nuevo León, al decir que algunos miembros del grupo son “nacionalistas”, insinúa que otros integrantes son extranjerizantes. El señor Chapa asegura que la riqueza neoleonesa fue creada por sus habitantes, aunque en ningún momento niega la existencia de intereses extranjeros en las empresas de sus representados.

Tampoco hay acuerdo sobre el conservadurismo de ese grupo. Scott asegura que se opone a la distribución de la riqueza, y Cañedo Benítez ha informado que se opuso a las reformas fiscales del expresidente Echeverría. Todo el país supo, además, de la oposición regiomontana al proyecto de Ley de Asentamientos Humanos. El señor Chapa, por lo contrario, presenta a sus compañeros como “la vanguardia en avances sociales de todo tipo y particularmente en favor de los obreros”.

El tercer desacuerdo se refiere a la conspiración del grupo contra el expresidente Echeverría. Scott lo asegura, y, obviamente, el señor Chapa lo niega.

El cuarto y fundamental desacuerdo en este debate tiene por objeto la motivación última de la oposición regiomontana al gobierno mexicano. Goshko opina que ella se dirigió sólo contra Echeverría, y que nació con el asesinato de don Eugenio Garza Sada, que fue propiciado o no evitado, según el grupo, por el presidente. Scott opina, como Goshko, que la oposición fue contra Echeverría, pero da una explicación alternativa: el grupo se irritó porque Echeverría les cerró las puertas al círculo presidencial encargado de las políticas económicas. La opinión del señor Chapa es muy diferente a las dos anteriores. No se trató de una oposición del grupo Monterrey al presidente Echeverría. Se trata de un permanente reproche de los burócratas de la capital al exitoso modelo económico de Monterrey. Ahora bien, ¿cuál es el modelo económico en que piensa el señor Chapa? Es aquel cuyo éxito "se ha logrado a través de la empresa privada —no por medio del gobierno y su intromisión". Según el señor Chapa, lo que existe no es una pugna particular y concreta entre un grupo de empresarios y un presidente, sino entre dos modelos económicos: el que asigna a la propiedad privada el control total de la riqueza de una nación y el que divide el control de esa riqueza entre el Estado y la empresa privada. Se trata, por lo tanto, y de acuerdo con la sensibilidad de Chapa, de un conflicto entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ideología económica de los hombres de Monterrey.

Analícemos con más cuidado este último desacuerdo. ¿Qué aumentó el encono del Grupo Monterrey contra Echeverría? La respuesta no parece ser la afectación de ningún interés económico vital, aunque no fuera sino porque no hay constancia de esa afectación. Hace algunos meses mostré aquí que el problema real que se debatió en torno al Proyecto de Ley de Asentamientos Humanos —al que tan enconadamente se opuso el Grupo Monterrey— fue el de la participación de los organismos de la empresa privada en las decisiones públicas que competen al Estado mexicano. Scott opina lo mismo con respecto a la relación entre el Grupo de Monterrey y el gobierno federal.

Si, según el señor Chapa, de lo que se trata es de quitar toda participación del gobierno mexicano en la economía del país, y si, según abundancia de pruebas, también se trata de que el Estado comparta con la empresa privada su capacidad de decisión política, parece que de lo que se trata es de romper el arreglo político que es la Constitución mexicana. Ojalá que el Grupo de Monterrey no olvide que al amparo de esa Constitución se ha desarrollado toda la empresa privada mexicana, y ojalá que todos los mexicanos no olvidemos que ese ordenamiento constitucional nos ha mantenido en paz, y que romperlo puede ser romper esa paz.

enero 20 de 1977

*Iván Zavala Echavarría*